

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
Rdo. Nº 171-2019	
DEMANDANTE	LUZ MARINA SÁNCHEZ JIMENEZ
DEMANDADO	COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-015-2018-00797-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de vejez – Régimen de transición pensional conforme a la Ley
DECISIÓN	Revoca

Medellín, veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a la regulación establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 *“por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*; en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de Junio de 2020 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, conforme al trámite establecido en las citadas disposiciones, que habilitan el procedimiento de sentencia escrita, y cumplido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria

de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **LUZ MARINA SÁNCHEZ JIMENEZ** en contra de **COLPENSIONES**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 027**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la demandante contra la sentencia que profirió el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública concentrada, celebrada el día 7 de junio de 2019, que resultó completamente desfavorable a sus intereses.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que nació el 29 de julio de 1956, por lo que cumplió los 55 años de edad el 29 de julio de 2011; es afiliada en el riesgo de vejez a COLPENSIONES desde el 17 de enero de 1990 y, solicitó a la entidad el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual le fue negada a través de la Resolución SUB 143.694 del 29 de mayo de 2018.

Refirió que cumple con la densidad de semanas que le permitiría acceder a la pensión de vejez, y que su historia laboral no reflejó los tiempos cotizados entre el 17 de enero de 1990 y el 30 de junio de 1993, equivalentes a 186 semanas cotizadas, laborados al servicio de los empleadores Marco Aurelio Agudelo Flórez y Rosa Emilia Castañeda Flórez, tiempos que dice fueron reconocidos judicialmente en su favor en otro proceso que adelantó.

Agregó que esos tiempos deben tenerse en cuenta, al evidenciarse la omisión de Colpensiones en adelantar las acciones judiciales de cobro para recuperar esas cotizaciones.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial esta dirigida a que se condene a la entidad demandada a reconocer y pagarle la pensión de vejez a la señora LUZ MARINA SÁNCHEZ JIMENEZ, como beneficiaria del régimen de transición pensional, con el retroactivo correspondiente, las mesadas adicionales, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales del juicio.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo COLPENSIONES a dar respuesta a la misma por intermedio de apoderada judicial (folios 30 y ss. del expediente).

A través de dicha respuesta, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de esta acción; aceptó la edad de la demandante, su permanencia en prima media a lo largo del tiempo y el agotamiento de la reclamación administrativa y posterior expedición del acto administrativo que le negó la pensión, y; propuso las excepciones perentorias que denominó *“inexistencia de la obligación inexistencia de la obligación de pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, buena fe de Colpensiones, compensación, indexación de las condenas, imposibilidad de condena en costas y prescripción”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública celebrada el 7 de junio de 2019, la Juez de conocimiento negó las pretensiones de la demanda concluyendo que la señora demandante no cumplía ni con los presupuestos para conservar el régimen de transición pensional y por esa vía encontrarse imposibilitada para acceder a la

pensión de vejez bajo los presupuestos del Decreto 758 de 1990, ni tampoco cumplía con las exigencias de la Ley 797 de 1993.

Lo primero, lo sustentó argumentando que la demandante, si bien inicialmente tenía más de 35 años de edad a la entrada en vigencia del sistema pensional, no conservó el régimen de transición al cumplir la edad de 55 años en el año 2011 y no reunir las 750 semanas mínimas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005. Su imposibilidad para lograr la pensión de vejez bajo la Ley 797 de 2003 la soportó en que la asegurada no reunía la densidad mínima de cotizaciones, precisando no poder tener en cuenta unos tiempos laborados entre 1991 y 1993, equivalentes a 186 semanas, ya que en el plenario no se encontraban acreditados en la historia laboral, y de existir otro proceso judicial donde se hubiere declarado el derecho a que se tuvieran en cuenta esos periodos, debía acudir a adelantar el respectivo proceso ejecutivo o elevar solicitud de corrección de historia laboral ante la entidad demandada.

Le impuso condena en costas a la demandante, en favor de la entidad demandada.

VI. – RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por el apoderado judicial de la señora LUZ MARINA SÁNCHEZ JIMENEZ, quien se opuso en su integridad a la sentencia de primera instancia y solicitó su revocatoria.

Sustentó la alzada argumentando que la señora demandante sí adelantó proceso ejecutivo conexo por la obligación de tener en cuenta las cotizaciones entre el 17 de enero de 1990 y el 9 de junio de 1993, para lograr que se tuvieran en cuenta 186 semanas cotizadas al sistema pensional, amén de las cuales alcanzaría a reunir más de 750 semanas cotizadas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y reunir más de 1000 semanas en cualquier época, o incluso las 500 semanas en los 20 años anteriores a la edad,

lo que le permitiría acceder a la pensión de vejez bajo el Decreto 758 de 1990, como beneficiaria del régimen de transición pensional.

Insistió en que la actora cumplía a cabalidad con la densidad de cotizaciones para acceder a la pensión de vejez en los términos solicitados.

Con fundamento en estos argumentos solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia.

Alegatos de conclusión:

En la oportunidad procesal pertinente, el apoderado judicial de la demandante allegó copia de la Resolución SUB 92.907 del 16 de abril de 2020, expedida por Colpensiones, a través de la cual, con motivo de una solicitud de reconocimiento elevada por la asegurada el 25 de febrero de 2020, la entidad, pese a reconocer que la asegurada contaba con más de 1,300 semanas cotizadas al 31 de diciembre de 2019, negó el reconocimiento de la pensión de vejez, con motivo de la existencia de este proceso.

Asimismo, el apoderado judicial de la demandante allegó registro civil de defunción de la señora Luz Marina Sánchez Jiménez, bajo Indicativo Serial Nro. 10101426 que acreditaba el fallecimiento de la demandante el día 23 de julio de 2020; solicitud de sucesión procesal en favor del hijo de la causante BERTULFO VASQUEZ SANCHEZ, identificado con CC. Nro. 8.101.122; el registro civil de nacimiento del mencionado, bajo Indicativo serial Nro. 8423836 que acreditaba su parentesco con la señora Sánchez Jiménez; poder especial otorgado por el descendiente de la causante facultando al apoderado judicial de la activa para solicitar la referida sucesión procesal y, escrito de oposición al requerimiento realizado por esta sala, a través del cual se solicitó informar si respecto de los bienes de la causante ya se había adelantado trámite o proceso de sucesión por causa de muerte, o si la masa herencial no había sido objeto de adjudicación en cabeza de los sucesores procesales de la causante.

Esta sala le reconoce personería jurídica amplia y suficiente al Dr. Juan Camilo Pulgarín Martínez, con TP. Nro. 129.670 del CSJ, para que lleve la representación judicial del señor BERTULFO VASQUEZ SANCHEZ dentro de este proceso.

Por su parte, la Dra. Ana María Toro Toro, con T.P. Nro. 313.795 del CSJ, como apoderada judicial de COLPENSIONES allegó alegatos de conclusión.

Esta sala le reconoce personería jurídica amplia y suficiente para que en la calidad anotada lleve la representación judicial de la entidad demandada, conforme a la documentación allegada.

A través de dichos alegatos expresó que la demandante no es beneficiaria del régimen de transición pensional ni tampoco cumple con las exigencias de la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión de vejez, argumentos por los que solicitó se confirme la sentencia absolutoria de primera instancia.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión.- Pensión de Vejez – Retroactivo Pensional – Sucesión Procesal.

El objeto central de esta Litis, se extiende a los puntos objeto de inconformismo planteados por el apoderado judicial de la señora demandante; que comprende su disenso con la decisión absolutoria de primera instancia sobre la pretensión de reconocimiento de la pensión de vejez bajo el régimen de transición pensional y realizar pronunciamiento de la sucesión procesal solicitada ante el hecho del deceso de la señora Luz Marina Sánchez Jiménez, sobreviviente al curso del proceso.

En desarrollo del principio de consonancia y abordando los puntos específicos que sustentan la alzada, partirá la sala de revisar el aspecto objetivo del derecho pensional que se reclama, esto es, si se cumple la densidad de semanas cotizadas por la asegurada para acceder a la pensión de vejez.

Es preciso referir las siguientes consideraciones de orden jurídico:

Condiciones legales para ser beneficiario del Régimen de Transición pensional y Requisitos legales para acceder a la Pensión de Vejez bajo el Sistema General de Pensiones (Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003):

El régimen de transición pensional es una figura jurídica creada por el legislador para proteger los intereses, derechos y beneficios de las personas que estaban próximas a pensionarse a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones creado por la Ley 100 de 1993, buscando mantenerles las condiciones de su régimen inicial en algunos tópicos (edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y monto), frente a las exigencias uniformes que introdujo el Legislador al promulgar el sistema pensional contenido en la Ley 100 de 1993.

Así lo dispuso el artículo 36 de la citada Ley, enfocando el beneficio normativo a los trabajadores, que a la fecha de entrada en vigencia del SGP, que para el sector privado fue el 1° de abril de 1994, cumplieren una de las siguientes condiciones: Mujeres con treinta y cinco (35) o más años de edad; hombres con cuarenta (40) o más años de edad, hombres y mujeres que, independientemente de la edad, acrediten quince (15) años o más de servicios

cotizados a esa fecha concreta, conforme lo señala el artículo 151 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, se debe tener en cuenta además, la reforma que al artículo 48 de la Constitución Política de 1991, le introdujere el Acto Legislativo 01 de 2005, en su artículo 1° parágrafo transitorio número 4°, el cual estableció que dicho régimen, no podría extenderse más allá del 31 de Julio de 2010; excepto para aquellos trabajadores que estando en dicho régimen, tuvieran cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del citado Acto Legislativo, esto es, el 29 de Julio de 2005, a los cuales se les mantendrían dichas ventajas pensionales hasta el año 2014 (31 de Diciembre) .

Bajo la Ley 797 de 2003, las condiciones pensionales se encuentran contempladas en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de dicha ley, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 9o. El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

PARÁGRAFO 1o. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta:

- a) *El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones;*
- b) *El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los tiempos servidos en regímenes exceptuados;*
- c) *El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.*
- d) *El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.*
- e) *El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión.*

En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional.

Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el petionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte.

PARÁGRAFO 2o. Para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La facturación y el cobro de los aportes se harán sobre el número de días cotizados en cada período.

*PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE>
Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones.*

Transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión, si este no la solicita, el

empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel.

Lo dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores públicos afiliados al sistema general de pensiones.

PARÁGRAFO 4o. Se exceptúan de los requisitos establecidos en los numerales 1 y 2 del presente artículo, las personas que padezcan una deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más, que cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado en forma continua o discontinua 1000 o más semanas al régimen de seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993.

*<Apartes subrayados, en letra itálica, y subrayados y en letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles. Aparte tachado INEXEQUIBLE>
La madre trabajadora cuyo hijo menor de 18 años padezca invalidez física o mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en las condiciones establecidas en este artículo”.*

Caso Concreto:

El reparo del apoderado judicial de la demandante con la sentencia de primera instancia, se enfoca en que la asegurada, si bien conforme a la historia laboral certificada por Colpensiones no reúne en principio las mínimas 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 para conservar el régimen de transición pensional hasta el 2014, alcanzaría a reunir esa densidad al tener en cuenta las 186 semanas comprendidas entre el 17 de enero de 1990 y el 9 de junio de 1993, amén de la declaratoria judicial que en otro proceso obtuvo, validándose la relación laboral con los empleadores Marco Aurelio Agudelo Flórez y Rosa Emilia Castañeda.

En el hecho cuarto de la demanda se lee:

“Mi mandante tuvo que presentar demanda ordinaria laboral en contra de sus empleadores MARCO AURELIO AGUDELO FLOREZ Y ROSA EMILIA CASTAÑEDA FLÓREZ, así como a sus herederos por el pago de los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones los cuales fueron ordenados

*a su favor mediante sentencia del JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN con radicado 2013-0766 (INCLUSO TIENE EJECUTIVO CONEXO CON RADICADO 2017-816) APORTES DESDE EL DÍA 17 DE ENERO DE 1990 HASTA EL 09 DE JUNIO DE 1.993 CON BASE A UN IBC DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE PARA CADA AÑO con sus respectivos intereses moratorios. Es decir, un total de TRES AÑOS, CUATRO MESES, VEINTITRÉS DÍAS, **equivalente a 186 semanas**...”.*

Empero, al revisar el expediente administrativo obrante al plenario en medio digital a folio 37, se observa en historia laboral que la afiliación de la señora Sánchez Jiménez al entonces Instituto de los Seguros Sociales se llevó a cabo el 10 de junio de 1993 como trabajadora dependiente de su empleadora ROSA EMILIA CASTAÑEDA VALLEJO, sin que se evidencie que se encuentren cargadas las 186 semanas a que hace referencia el recurrente, comprendidas entre el 17 de enero de 1990 y el 9 de junio de 1993 con esa misma empleadora.

Cumple precisar que el tiempo que solicita el apoderado de la demandante sea tenido en cuenta, es anterior al acto jurídico de afiliación y según sus propios dichos no se trata de mora patronal sucedánea a la afiliación como acto jurídico generador de derechos y obligaciones en materia de seguridad social (CSJ SL 763 de 2014 y SL 6035 de 2015, entre otras), sino que se trata de ciclos en los que se ordenó directamente en un proceso judicial a los empleadores pagar el respectivo calculo actuarial.

En efecto, se observa a folios 13 y siguientes del expediente una providencia del 11 de septiembre de 2018, proferida por la entonces Sala Tercera de Decisión Laboral de este tribunal, en la que se revocó auto que rechazó demanda ejecutiva conexas en primera instancia, donde se pretendía ejecución contra los herederos de MARCO AURELIO AGUDELO FLÓREZ, ejecutándose la sentencia ordinaria proferida el 20 de junio de 2014 y confirmada en segunda instancia el 17 de julio de 2015, por los aportes pensionales de la señora Luz Marina Sánchez Jiménez, comprendidos entre el 17 de enero de 1990 y el 9 de junio de 1993.

Tal situación hace evidente que, si bien esos tiempos fueron reconocidos, no son exigibles directamente a Colpensiones, al no ser resultado de mora patronal y de omisiones de cobro de parte de la administradora.

De esta manera, encontrándose determinado el litigio en este proceso solo a efectos de establecer si a la demandante le asistía derecho al reconocimiento a la pensión de vejez, resulta acertado el razonamiento de la A quo cuando precisó que era a través del respectivo proceso ejecutivo y/o la respectiva solicitud de corrección y actualización de historia laboral de la asegurada, que debía lograrse que se incluyeran esas 186 semanas en la historia laboral de la demandante.

Precisado lo anterior, es pertinente indicar que la demandante no alcanzaba a reunir al 29 de julio de 2005 las mínimas 750 semanas de cotización para haber conservado el régimen de transición de cara a las exigencias del Acto Legislativo 01 de 2005, indispensables para haber conservado el régimen de transición pensional hasta el año 2014, ya que no era suficiente que la demandante tuviere 35 años de edad cumplidos al 1º de abril de 1994, en tanto cumplió los 55 años de edad en el 2011.

Advertido el acierto de la A quo en torno a que la señora LUZ MARINA SÁNCHEZ JIMENEZ no es sujeto de aplicación del Decreto 758 de 1990 vía régimen de transición, resulta pertinente revisar si, conforme a la Ley 797 de 2003 la asegurada alcanzó a dejar causado el derecho a la pensión de vejez con base en el conteo de semanas que registró hasta diciembre de 2019 y de las cuales dio cuenta Colpensiones en la Resolución SUB 92.907 del 16 de abril de 2020, expedida con motivo de una reclamación elevada ante la entidad en el curso de este proceso.

La juez de primera instancia también analizó esta posibilidad, pero no halló causado el derecho por insuficiencia de las semanas; obviamente la A quo no conocía la nueva realidad en torno a densidad de cotizaciones que originaba la continuidad de la asegurada en el sistema pensional, amén de lo cual reunió 1,324 semanas al 30 de diciembre de 2019.

Partiendo de la aceptación de Colpensiones de que la asegurada alcanzó a reunir 1.324 semanas de cotización hasta diciembre de 2019 y evidenciado que cumplió los 57 años el 29 de julio de 2013, surge palmario que el derecho pensional se causó a partir del 1º de enero de 2020 bajo las exigencias de la Ley 797 de 2003, en concordancia con los artículos 13 y 35 del Decreto 758 de 1990.

Al respecto, resulta pertinente acudir a la tesis sostenida por la sala de casación laboral, entre otras en las sentencias Rad 28.884 de 2007 y SL 2063 de 2020, en las que se ha validado el reconocimiento pensional en casos en los que, si bien con la demanda inaugural no se tenían los requisitos pensionales incurriéndose en petición antes de tiempo, los mismos se alcanzan en el curso del proceso, trátase de edad o semanas, o ambos. Al tratarse de un derecho irrenunciable y que realiza derechos pensionales, es pertinente reconocer la pensión, así incluso la prestación se haya solicitado bajo otra normativa conforme a la cual no se alcanzó el derecho, pero sí bajo otra que permite su acceso, que es lo que ocurre en este caso.

La pensión que causó la demandante asciende al salario mínimo legal mensual vigente, en atención a que sus cotizaciones fueron por ese valor (Artículo 35 ley 100 de 1993). Causó un retroactivo pensional, a razón de una mesada pensional mensual de \$877.803 por valor de **cinco millones novecientos treinta y nueve mil ochocientos pesos (\$5.939.800=)**, causado entre el 1º de enero y el 23 de julio de 2020, fecha de su fallecimiento¹.

Sobre este retroactivo, Colpensiones deberá realizar descuentos en salud y girarlos al sistema de salud por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 23 de julio de 2020.

No se accederá al pago de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que al momento de la reclamación inicial

¹ Este cálculo conforme al cual se obtiene el guarismo de **\$5.939.800**, se obtiene de sumar 6 mesadas pensionales por valor de \$877.803 para un total de \$5.266.818, y sumar el valor de \$672.982 equivalente a 23 días de mesada hasta el 23 de julio de 2020.

presentada por la actora en orden al reconocimiento de la pensión de vejez, aún no contaba con los requisitos pensionales (densidad de semanas) que hicieren incurrir a la entidad en mora de reconocer la prestación, se encontraba aun activa al sistema pensional y este proceso estaba en curso.

En su lugar, se accederá a la indexación de las sumas objeto de condena, la cual deberá ser calculada por COLPENSIONES al momento del pago del retroactivo reconocido, teniendo en cuenta que es un hecho notorio la depreciación monetaria. Para calcular la indexación, deberá Colpensiones aplicar la fórmula:

$$\text{Indexación} = \frac{\text{Índice final}}{\text{Índice inicial}} \times \text{Capital} - \text{Capital}$$

De la Sucesión procesal:

La señora LUZ MARINA SANCHEZ JIMENEZ falleció el 23 de julio de 2020. En el expediente se encuentra acreditada la existencia de su hijo BERTULFO VASQUEZ SANCHEZ, identificado con CC. Nro. 8.101.122, según el registro civil de nacimiento bajo Indicativo serial Nro. 8423836, aportado al proceso.

Conforme a las disposiciones legales del derecho común que establecer los órdenes hereditarios, es evidente que el hijo de la causante tiene la calidad de legitimario forzoso para suceder a título universal el patrimonio de su señora madre (artículo 1008 CC), y dentro de él los derechos resultantes de procesos jurisdiccionales en curso, que para el caso concreto es el retroactivo pensional causado entre enero y el 23 de julio de 2020 y los intereses moratorios que se han ordenado.

La Sucesión Procesal se encuentra regulada en el artículo 68 del CGP, que establece que *“fallecido un litigante o declarado ausente, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador”*.

Al encontrarse probada la calidad de legitimario forzoso del señor BERTULFO VASQUEZ SANCHEZ sobre los bienes de su madre, esta sala encuentra procedente –tal y como lo solicitó el apoderado judicial de la activa– tenerlo por sucesor procesal de la señora LUZ MARINA SÁNCHEZ JIMENEZ.

Ahora, la magistrada ponente, al no tener conocimiento de si se habían adelantado trámite o proceso sucesoral sobre los bienes y derechos de la señora SANCHEZ JIMENEZ, y no propiamente con la finalidad de adelantar procedimientos ajenos al juez laboral que bien es sabido que por regla de competencia corresponden al juez de familia o al notario del lugar del último domicilio de la causante, procedió a requerir a la activa, para conocer si eventualmente existía adjudicación a herederos, ya que la sala desconoce de la existencia de otros legitimarios determinados e incluso indeterminados, así como también desconoce si la causante dejó o no más bienes que integren el acervo bruto herencial. Con ese fin, se requirió para tener certeza de si el acervo sucesoral había sido objeto del adelantamiento de dicho trámite.

Teniendo en cuenta que el apoderado judicial del sucesor procesal no dio cuenta del adelantamiento de trámite o proceso sucesoral alguno y sin perjuicio de la calidad de legitimario y sucesor procesal del señor BERTULFO VASQUEZ SANCHEZ, esta sala ordenará que el pago de los derechos de orden pensional que aquí se reconocen se haga a la masa herencial de la señora LUZ MARINA SÁNCHEZ JIMENEZ.

Precisamente por desconocerse si el señor BERTULFO VASQUEZ SANCHEZ es el único heredero de la causante tal y como lo asegura el recurrente, se hace menester direccionar el pago a la masa herencial de la causante, debiendo corresponder a Colpensiones pagar estos derechos a quienes acrediten el derecho a suceder a la señora SANCHEZ JIMENEZ, sin perjuicio del derecho que evidentemente le asiste a su hijo, sucesor procesal en esta causa².

² De conformidad al artículo 1008 del Código Civil, además de suceder a una persona a título singular, se sucede a título universal “cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos como la mitad, tercio o quinto”. Es decir que ser heredero a título universal, significa suceder al difunto en todo su patrimonio.

De esta manera, se **REVOCARÁ** íntegramente la sentencia de primera instancia, que absolvió a la entidad demandada de todas las pretensiones de la demanda, **DECLARANDO** no probadas las excepciones perentorias propuestas por **COLPENSIONES**, salvo la de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR INTERESES MORATORIOS, y se **ORDENARÁ** a dicha entidad pagar

Esa universalidad de bienes que se transmiten a los herederos legítimos, también comprende los créditos impuestos por la jurisdicción, y que por causa de la muerte el causante no alcanzó a hacer efectivos. Tal es el caso de las sentencias judiciales que contienen derechos en favor del causante y que no fueron cobrados por este.

Obviamente para adelantar ese tipo de acciones judiciales transmitidas por causa de muerte, se debe contar con “*vocación hereditaria*”, entendida como la condición que debe existir para que se adopte la calidad de heredero. Tal calidad, según la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (sentencia del 27 de mayo de 1978), permite que quien goza de ella “*tenga interés jurídico para ejercer las acciones que tenía su antecesor y pueda ejercitarlas en las mismas condiciones que este podría hacerlo si viviera*”.

Esas acciones o derechos que se transmiten a los legitimarios, entran a formar parte de la masa herencial, que como tal bien es sabido que constituye una universalidad jurídica.

Para acceder a su derecho herencial, los herederos pueden adelantar el trámite sucesoral, con la citación al proceso de los herederos indeterminados; o pueden optar directamente por reclamar del deudor el derecho que le correspondía al difunto, pero no para sí, sino para la masa herencial.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 7.392 del 16 de febrero de 1999, refiriéndose a este tema, expresó:

“cuando se demanda “la sucesión” o “para la sucesión”, la parte demandada está constituida por todos los herederos y la parte actora lo está por el heredero o los herederos que piden para la comunidad”.

A partir del anterior delineamiento, es claro que los herederos en su calidad de tal representan al causante, por lo que, si heredaron el derecho a cobrar judicialmente o extrajudicialmente un crédito, es claro que deben demandar o pedir para la sucesión, es decir como coparticipes de la comunidad hereditaria. Distinta hipótesis ocurre cuando ya se adelantó todo el trámite sucesoral (sea judicial o notarial), y ya existen adjudicaciones a los sucesores, evento en el cual cada quien puede cobrar su cuota correspondiente.

La Sala de Casación civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia CSJ SC, 14 Ago. 2006, rad. 1997-2721-01, reiterada en la del 10 de mayo de 2016, MP. Ariel Salazar Ramírez, expresó lo siguiente:

“Cuando se demanda para una sucesión, la Corte, respecto de la legitimación en la causa por activa, tiene dicho que cada heredero, en razón de suceder al causante en todos sus derechos y obligaciones transmisibles (artículo 1008 del CC), y de la representación del causante en tales derechos y obligaciones (artículo 1.155 ibídem), puede demandar para todos los herederos... como sucesor de todos los derechos transmisibles del causante y como titular del dominio per universitatem sobre los bienes relictos, aunque éste no se concrete sino en la partición, el heredero tiene desde la delación de la herencia todas las acciones que el de cujus tenía (C. C., artículos 1008 y 1013), y por ende puede, demandando para la sucesión, incoar cualquier acción tal cual podría haberlo hecho el mismo causante”.

Es decir que, cuando se demanda para la sucesión, no se necesita que concurren todos los herederos, ya que tan solo uno de ellos al demandar para la universalidad jurídica, estaría cobijando a todos los herederos del causante.

Es decir, en palabras de la propia Corte, “*lo que pertenece a la sucesión es de los herederos. Ellos no tienen un derecho personal, o crédito, sino un derecho real: el de herencia sobre la universalidad jurídica, con la esperanza de concretarse en el dominio sobre uno o más bienes. Antes de la partición hay una comunidad sui generis; un patrimonio común destinado a liquidarse*”.

Es por ello por lo cual los herederos, más allá de que tengan vocación hereditaria, no pueden pretender cobrar para sí el derecho que les corresponde, sin haber abierto el respectivo trámite sucesoral de manera formal; o en su defecto, solicitar el derecho para la sucesión, esto es, con destino al acervo común de todos los legitimados.

En sentencia de la misma Corporación del 13 Dic. 2000, rad. 6488, se dijo al respecto:

“El derecho a una herencia no otorga per se acción para reclamar los bienes que la constituyan como si fueran de propiedad del heredero, razón por la cual, aun siendo único, el legislador no le autoriza ejercitar las acciones reales o personales que correspondían al causante, de modo que debe obrar jure hereditario, lo que supone reivindicar «para la comunidad conformada por los herederos de la universalidad de derecho que dejó el causante».

a la **MASA HERENCIAL de la señora LUZ MARINA SÁCHEZ JIMENEZ**, de la cual es beneficiario el señor **BERTULFO VASQUEZ SANCHEZ** como sucesor procesal de la causante en su condición de legitimario forzoso, un retroactivo pensional por valor de **(cinco millones novecientos treinta y nueve mil ochocientos pesos (\$5.939.800=)**, causado entre el 1º de enero y el 23 de julio de 2020, fecha del fallecimiento de la señora LUZ MARINA SÁNCHEZ JIMENEZ, con la respectiva indexación.

Quedará facultada Colpensiones para realizar los descuentos correspondientes con destino al sistema de salud del retroactivo pensional reconocido.

COSTAS PROCESALES EN AMBAS INSTANCIAS.

En ambas instancias, las costas procesales correrán a cargo de COLPENSIONES y en favor de la activa. Las agencias en derecho en primera instancia deberán ser fijadas por la A quo en su oportunidad procesal pertinente. En esta instancia se ha causado un salario mínimo legal mensual vigente para 2021.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: TENER por sucesor procesal al señor **BERTULFO VASQUEZ SANCHEZ**, identificado con CC. Nro. 8.101.122, sin perjuicio del

derecho que le pueda asistir a otros causahabientes de la señora **LUZ MARINA SÁNCHEZ JIMENEZ**, quien en vida se identificó con CC. Nro. 32.524.596

SEGUNDO: REVOCAR íntegramente la sentencia de primera instancia, de fecha y procedencia conocidas, que se ha conocido en Apelación, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: ORDENAR a COLPENSIONES pagar, con destino a la masa herencial de la señora **LUZ MARINA SÁNCHEZ JIMENEZ**, de la cual es beneficiario el señor **BERTULFO VASQUEZ SANCHEZ** como sucesor procesal de la causante en su condición de legitimario forzoso, un retroactivo pensional por valor de *cinco millones novecientos treinta y nueve mil ochocientos pesos (\$5.939.800=)*, causado entre el 1º de enero y el 23 de julio de 2020, de conformidad a lo impuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

CUARTO: AUTORIZAR a COLPENSIONES a efectuar los respectivos descuentos del retroactivo reconocido, con destino al sistema de salud, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.


QUINTO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a la masa herencial de la causante, la indexación sobre el retroactivo pensional reconocido, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

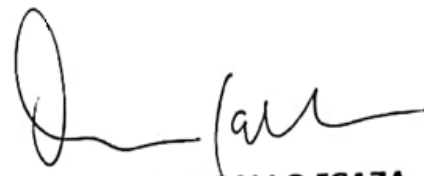
SEXTO: DECLARAR no probadas las excepciones perentorias propuestas por **COLPENSIONES**, salvo la de **INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR INTERESES MORATORIOS**, la cual se declara **PROBADA**, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.


SÉPTIMO: CONDENAR a COLPENSIONES en costas procesales de ambas instancias, en favor de la activa. Las agencias en derecho en primera instancia deberán ser fijadas por la A quo en su oportunidad procesal pertinente. En esta instancia se ha causado un salario mínimo legal mensual vigente para 2021.

OCTAVO: SE ORDENA la notificación por estados de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° **088** del **24 de mayo de 2021.**

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>